

respeto de la casa J. de la Quintana y Compañía, por la cantidad de los derechos causados por las mercancías que recibieron como consignatarios, dueños, importadores ó poseedores, en los vapores "Ydaho" y "Constitution," y en la barca "Frederick Hartwig."

Por tales razones y fundamentos, y con apoyo en la fracción 1ª artículo 101 de la Constitución, se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Sinaloa que concedió el amparo á los quejosos, y se declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á D. J. Marcelino Gonzalez de Lapidana representante de la casa J. de la Quintana y compañía, contra el cobro que por disposición del Gobierno de la Unión y en ejercicio de la facultad económico-coactiva, les hace el Administrador de la Aduana Marítima de Mazatlan, de ciento tres mil seiscientos noventa y dos pesos, setenta y seis centavos, como derechos de importación causados por las mercancías extranjeras, que descargó la Barca alemana "Frederick Hartwig," fondeada en aquel puerto el 23 de Enero de 1862; y de novecientos setenta y siete pesos, treinta y cuatro centavos, como derechos de importación causados por las mercancías que á la consignación de la propia casa, trajeron los vapores "Ydaho" y "Constitution" fondeados en aquel puerto en 11 de Noviembre y 8 de Diciembre de 1871.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por todos los votos, menos uno, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*

rez.—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis M. Aguilar,* secretario

Es copia que certifico. Mexico, de 1873.
—*Lic. Enrique Landa* oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Carlos Pasow, como socio gerente de la casa Melchers Sucesores del comercio de Mazatlan, contra el Administrador de la Aduana Marítima de este Puerto, que cobra á dicha casa, por medio de la facultad económico-coactiva, la cantidad de \$ 80. 753, 79. por los derechos de importación de varias mercancías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Como este juicio de amparo es enteramente idéntico al que se ventila en ese mismo juzgado por los SS. J. de la Quintana y Compañía en el que tengo ya entendido mi parecer; creo de mi deber reproducirlo para obrar en consecuencia: dice así.—"Los SS. J. de la Quintana y Compañía se han presentado ante V. solicitando amparo contra los procedimientos del C. Administrador de esta Aduana Marítima, que les exige en ejercicio de la facultad coactiva el pago del treinta y tres por ciento de los derechos que enteraron á los sublevados de este Puerto por las importaciones, y en las fechas que se determinan en el escrito relativo. La petición se ha hecho por creerse violadas con los procedimientos administrativos, las garantías que conceden los artículos 16 y la parte final del 8º de la Constitución general de la República.—El primero de dichos artículos dice testualmente: "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,

papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." Es así que en el presente caso se ha procedido con los SS. J. de la Quintana y Compañía por la Administración de la Aduana Marítima con total sujeción á las prescripciones del artículo antes citado; luego siendo como es el Administrador de la Aduana, la autoridad competente en virtud de la ley de 11 de Diciembre de 1871 que declaró vigentes las de 20 de Enero de 1837 y de 20 de Noviembre de 1838 para ejercer la facultad coactiva, es evidente que no se han violado las garantías cuyo amparo se invoca.—Respecto de la queja que se funda en la parte final del artículo 8º de la Constitución, créo el que suscribe que será motivo para exigir la responsabilidad oficial al Administrador, pero que nunca para intentar el juicio de amparo que se promueve.

Todas las razones, todos los fundamentos de la petición de los Señores J. de la Quintana y Ca seran buenos para formalizarse en un juicio contencioso y presentándose como excepciones, acaso admisibles en sus procedimientos; pero que absolutamente son extemporáneos en un juicio de amparo. Que los pagares son nulos como arrancados por la fuerza; que los arreglos hechos con el Presidente Juárez no tienen valor aunque no son otra cosa que la ratificación de aquellos, y un compromiso para pagar solo el treinta y tres por ciento de lo que importaron los derechos causados; todo esto no puede dilucidarse ni mucho menos resolverse sino por un juicio contencioso declarativo, que dirima para siempre estas cuestiones.—Entre tanto, estando los pagarés á la orden de la Administración, terminado el arreglo con el Gobierno para el pago del treinta y tres por ciento y vigente la ley que concede el ejercicio de la facultad coactiva, es evidente que no existe la violación de las garantías que impetran los Señores J. de la Quintana y Ca y que no procede

TOMO IV.—PARTE II.

su recurso. Para mayor corroboración de lo expuesto, el fiscal se refiere, punto por punto, al informe rendido por el C. Administrador de la Aduana Marítima, y por todo pide que se resuelva: Que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á los Señores J. de la Quintana y Ca contra el cobro de ciento tres mil seiscientos noventa y dos pesos setenta y dos centavos \$103.692.72 centavos que les exige aquel empleado por medio de la facultad coactiva.—Así espero que el Juzgado se sirva determinarlo, con relación al presente asunto.

Mazatlan, Enero 9 de 1873.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Enero 16 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido por D. Carlos Passow, como socio gerente de la Casa Molchers Sucesores, contra la providencia que el C. Administrador de la Aduana marítima dictó y mandó ejecutar en uso de la facultad económico-coactiva para exigir á dicha Casa la cantidad de (\$ 89.752 79 centavos) por los derechos de importación que causaron los efectos que en este Puerto descargó la barca «Adolina» y «Marianne», alegando el quejoso, que con tal providencia se viola la garantía que el artículo 16 de la Constitución general otorga á todo habitante de la República, y que por habérsele negado copia de la misma providencia, y los recaudos en que se apoyó el C. Administrador para dictarla, se vulneró también la que se dispensa por la parte final del artículo 8º del mismo Código, cuyas dos infracciones le obligan á promover este juicio por no estimar á dicho empleado autoridad competente para haber ordenado el procedimiento contra que pide amparo, apoyándose en la fracción 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. Visto así mismo la solicitud que se hizo para que se suspendiera el acto nacido de la repetida providencia; lo resuelto en ella; los documentos aducidos

por el quejoso en justificación de los derechos que alega; lo pedido por el C. Promotor fiscal con todo lo mas que ver convino.

Considerando: que la demanda de amparo que promueve el Sr. Passow no es contra el cobro que se le hace, no porque desconozca el derecho que la Hacienda pública cree tener para cobrarle la cantidad que se le reclama, sino porque este cobro, se hace indebidamente por medio de la facultad económico-coactiva, la que no puede caber en el caso presente, supuesto que teniendo como tiene justas escepciones que en su concepto son atendibles, solo á los Tribunales corresponde decidir sobre ellas, á la vez que su naturaleza hace á este negocio verdaderamente contencioso.

Considerando tambien: que la ley de 20 de Enero de 1837 en que funda su procedimiento el C. Administrador, prohíbe expresamente en su artículo 1º á los empleados ingerirse en la jurisdicción contenciosa propia de los Jueces, y declara en el 2º, que por negocios contenciosos se entiendan aquellos en que sean forzosas las actuaciones judiciales, ó en lo que quepa disputa sobre la paga á consecuencia de la variación de circunstancias y de tiempo que ofrezcan motivo fundado de duda para la aplicación de la ley, y prohíbe en el 3º que pueda tener lugar providencia alguna coactiva, cuando el derecho del fisco no sea claro ó indudable.

Considerando además de esto, que en el hecho de alegar el quejoso que en el otorgamiento del pagaré que se pretende hacer efectivo, intervinieron coacción y una fuerza mayor, ya propone una escepción admisible en derecho, y por consiguiente solo los Tribunales deben hacer tal correspondiente calificación sobre su validez, y si se tiene por bastante para desvirtuar la acción del fisco, cuya circunstancia exige actuaciones judiciales propias de los Tribunales, y muy ajenas de la facultad económico-coactiva.

Considerando tambien: que aunque el pagaré en cuestión fué otorgado por el total de los derechos de importación que se exi-

gen á la casa Melchers Sucesores, quedó despues por orden supremo reducido á la tercera parte de su valor, y no obstante esto, hoy se quiere hacer efectivo por toda la cantidad que expresa, cuyas circunstancias ocasionan una verdadera innovación, la que demanda un examen judicial para resolverse si se admite aquella como escepción, y por cual de las dos cantidades deben estimarse deudores los que firmaron tal documento, cuya resolución no permite providencia alguna coactiva, supuesto que la misma innovación hace que el derecho del fisco no sea claro ó indudable.

Considerando igualmente: que si bien la hacienda pública tiene un derecho indisputable para cobrar derechos de importación por los efectos extranjeros que se descarguen en cualquier puerto de los de la República, el que hoy pretende hacer valer por medio de la facultad económico-coactiva no debe extimarse de tal naturaleza, á la vez que las circunstancias que precedieron al otorgamiento del pagaré en que se funda el cobro, la innovación que á este se le hizo, y el no aparecer los Sres. Melchers Sucesores como importadores ni consignatarios de los efectos que causaron los derechos de importación que se les cobran, dan un motivo fundado para dudar de la aplicación de la ley, y por consiguiente se hacen indispensables las actuaciones judiciales.

Considerando por último: que supuesto que el fisco siempre tiene expedita su acción para percibir las indemnizaciones que cree se le deben, ya sea de los causantes de derechos, ya de los efectos porque deben satisfacerla, ó de cualesquiera bienes de los que sean deudores de él, en nada se perjudica cuando por razón de la variación de circunstancias no quepa su cobro en el uso de la facultad económico-coactiva, y tenga por tal motivo la necesidad de ocurrir para ejecutarla á los tribunales, los que resolverán con conocimiento de causa, sobre el derecho que reclama.

Por estas razones, y teniendo presente

la ejecutoria que la Suprema Corte de Justicia dió en 11 de Marzo de 1871 y consta en las páginas 195 y 196 de la 2ª parte del Semanario Judicial, y con los fundamentos de los artículos 16, 101 y 102 de la Constitución general, y la fracción 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo con las siguientes proposiciones: 1ª: La Justicia de la Unión ampara y protege á D. Carlos Passow socio gerente de la casa Melchers Sucesores, contra la providencia dictada y mandada ejecutar en uso de la facultad económico-coactiva por el C. Administrador de la Aduana marítima, y por la que se exige á dicha casa la cantidad de ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y dos pesos, setenta y nueve centavos (\$ 89.752,79) valor total de los derechos de importación que causaron los efectos descargados en este puerto de la barca "Adelina y Marianne." 2ª: Sáquense dos copias de esta sentencia para remitirse, una al Semanario Judicial, y para publicarse la otra en el periódico oficial del Estado. 3ª: Previa notificación de ella, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su revisión. El Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó con los de asistencia.—*Pedro S. Bermúdez.*—A.—*Aurelio Padilla.*—A.—*Antonio O. Iturrios.*

Es copia. Mazatlán, Enero 21 de 1873.
—*Pedro S. Bermúdez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 15 de 1873.—Visto el juicio de amparo que en 28 de Diciembre de 1872, promovió en el Puerto de Mazatlán, ante el Juez de Distrito del Estado de Sinaloa, D. Carlos Passow como gerente de la casa Melchers Sucesores del comercio de ese Puerto, contra el cobro que por disposición del Gobierno federal, y ejercitando la facultad económico-coactiva, hace á esa ca-

sa el Administrador de la Aduana Marítima, de la cantidad de (\$ 89, 752. 79.) ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y dos pesos setenta y nueve centavos, valor de los derechos de importación de la Barca "Adelina y Marianne," que fondeó en aquel Puerto el 7 de Febrero del citado año de 1872; con cuyo cobro y procedimiento alegan los quejosos, que se han violado las garantías que concede la primera parte del artículo 16 de la Constitución federal, porque los derechos expresados, fueron pagados por la fuerza á los que se sublevaron en dicho Puerto contra el Gobierno de la Nación en 17 de Noviembre de 1871, y en virtud de las razones que aducen, creen que ese pago unido al cobro que se les hace ahora, ha venido á constituir una cuestión de la competencia de los Tribunales, sin poderse ejercitar previamente la facultad económico-coactiva, como se está practicando; y además, que se ha violado la parte final del artículo 8º de la misma Constitución, dejándose sin resolver la petición que se hizo por parte del promovente para que se le diera copia de varios documentos.—Vistas las constancias de autos, y considerando: que los Sres Melchers Sucesores de Mazatlán, son los importadores, los consignatarios, ó por lo menos y según su propio acerto, los compradores de una parte de las mercancías extranjeras que descargó en aquel Puerto la Barca "Adelina y Marianne;" que por hallarse aquel Puerto á la sazón en poder de los revoltosos, y cerrado el comercio de altura, escala y cabotaje, las expresadas mercancías no habían sido examinadas conforme á las leyes fiscales de la República: que por el arancel vigente de aduanas marítimas y fronterizas, todas las mercancías extranjeras que se introduzcan á la República, tienen que manifestarse y pagar las cuotas aduanales que él establece, á cuyo pago están siempre afectas las mismas mercancías cualquiera que sea su poseedor; ó de lo contrario se reputan contrabando, é incurrir en las penas relativas. Que en esa

disyuntiva si el Gobierno de la Union, en atencion á las circunstancias, no ha creído deber tratar como contrabandistas á los Señores Melchers Sucesores, aun cuando la importacion de los efectos se hizo estando el Puerto clausurado, al considerarlos como importadores ó consignatarios leales, ó como compradores de mercancías legalmente importadas, no puede prescindir de cobrarles los derechos que esas mercancías causaron, y que no han pagado. Que en consecuencia es legítimo, claro é incontestable, el derecho con que el Administrador de la Aduana exige el pago de esas cuotas aduanales á los Sres. Melchers Sucesores, aun admitiendo que el pagaré de plazo cumplido que firmó la casa por el monto de ellas, tenga todos los defectos que se le objetan y aun cuando tal pagaré no existiera. Que esa legitimidad y claridad en el derecho con que la autoridad exige un pago, es todo lo que se requiere para el ejercicio de la facultad económico-coactiva, segun el artículo 89 de la ley de 20 de Enero de 1837. Que las escepciones opuestas contra el cobro, y que consisten en la violencia ejercida por los revoltosos para que se efectuara la importacion de las mercancías, en el pago que los mismos exigieron de los derechos causados; y en el valor que deba darse á la rebaja ofrecida por el Gobierno, lejos de poner en duda, suponen y confirman el derecho del Gobierno; y por lo mismo, aun cuando ellas sean de estimarse en el juicio respectivo, no pueden estorbar el ejercicio de la facultad económico-coactiva, hasta dejar asegurada la Hacienda pública, segun el artículo 18 de la ley antes citada. Que respecto de la reclamacion que hace el promoviente citando el artículo 89 de la Constitucion federal, el derecho que aduce si bien podría fundar con los requisitos de las leyes la exigencia de la responsabilidad judicial, no funda una violacion de garantías individuales, segun el espíritu de la citada Constitucion. Que en virtud de lo asentado, el Administrador de la Aduana marítima de

Mazatlán, está en su pleno derecho para ejercer la facultad económico-coactiva contra los Sres. Melchers Sucesores, sin que por esto se entiendan violadas las garantías que invocan estos comerciantes.

Por las razones y fundamentos expuestos y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente:—Primero: Se revoca la sentencia que pronunció el Juez de Distrito de Sinaloa, en Mazatlán, á 16 de Enero del corriente año, en la cual declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Carlos Passow socio gerente de la casa Melchers Sucesores, contra la providencia dictada y mandada ejecutar en uso de la facultad económico-coactiva por el C. Administrador de la Aduana Marítima, y por la que exige á dicha casa la cantidad de (\$ 89, 752. 79.) ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y dos pesos, setenta y nueve centavos, valor total de los derechos de importacion que causaron los efectos descargados en ese Puerto, de la Barca "Adelina y Marianne."—Segundo: La Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Melchers Sucesores contra el cobro que por disposicion del Poder Ejecutivo de la Union conforme á las leyes, y por medio de la facultad económico-coactiva les hace el Administrador de la Aduana Marítima de Mazatlán de la cantidad de (\$ 89, 752. 79) ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y dos pesos, setenta y nueve centavos, por derechos de importacion que causaron los efectos descargados en ese Puerto de la Barca "Adelina y Marianne." Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por todos los votos menos uno, lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—

Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zuvala.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 25 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado segundo de Distrito de México por Marcelino Domingo, contra su consignacion al servicio militar.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal queda enterado y dice: que en el juicio de amparo promovido por el C. Marcelino Domingo, contra la determinacion de la Comandancia militar del Distrito que lo destinó al servicio de las armas contra su voluntad en 4 de Agosto del año próximo pasado, su estado supuesto que es el de alegar y haciéndolo en la forma prevenida por la ley, dice: que la justificacion de V. se ha de servir declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege al expresado C. Marcelino Domingo, contra la resolucion de que se queja, porque con ella se han violado en su persona las garantías que otorga el artículo 59 de la Constitucion; demostrado como lo está por las pruebas que se han rendido, que dicho C. es hijo único de viuda que vive á sus expensas, y además por la misma comunicacion del C. Comandante militar, referente á que el acto reclamado se ejecutó en Agosto, estando vigente el decreto de 17 de Mayo que exceptuó del servicio de las armas á los CC. que tuvieran las circunstancias que favorecen al quejoso. Por cuyas razones el que suscribe pide se le otorgue el amparo al C. Marcelino Domingo, por ser conforme á justicia.

México, Mayo 8 de 1873.—*Moctezuma*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Mayo 10 de 1873. Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Marcelino Domingo, en virtud de reputar violada en su persona, con su consignacion al servicio militar, la garantía que otorga el artículo 59 de la Constitucion; el informe de la comandancia militar del Distrito; lo pedido por el C. promotor; la prueba rendida por el quejoso y demas que ver convinio, y considerando: que si bien á la fecha en que el mencionado Marcelino Domingo fué destinado al servicio de las armas se hallaba vigente el decreto de 17 de Mayo de 1872 sobre suspension de garantías, el mismo quejoso ha justificado hallarse comprendido en la escepcion que marca la fraccion artículo del del citado decreto, y en consecuencia en goce de la garantía del artículo 59 constitucional. Por tales consideraciones y atento lo pedido por la parte fiscal, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Marcelino Domingo, por haberse violado en el caso, con su consignacion al servicio militar, la garantía que otorga el artículo 59 de la Constitucion, segun lo dispuesto por el decreto de 17 de Mayo. Hágase saber; remítase copia de este fallo al Diario Oficial y Semanario Judicial, y elévense los autos previa citacion fiscal, á la Corte Suprema de Justicia para su revision. Lo decretó y firmó el C. Juez segundo de Distrito.—Doy fé.—*José María Canalizo*.—*Manuel M. de Chavero*.

Es copia. México, Mayo 10 de 1873.—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 12 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 30 de Abril próximo pasado promovió en la ciudad de México ante el Juzgado 29 de Distrito, Marcelino Domingo, contra la determinacion de la